

LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS MIGRANTES

Allan R. Brewer-Carías

*Profesor de la Universidad Central de Venezuela
Vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado*

I. LOS EXTRANJEROS MIGRANTES Y SU RÉGIMEN LEGAL

1. *La definición de migrante*

En Venezuela, todas las personas que no sean nacionales (venezolanos) son consideradas legalmente como extranjeras; y dentro de los extranjeros, la Ley de Extranjería y Migración de 2004 considera como migrantes aquellos extranjeros que ingresen al territorio de la República con el ánimo de residir en él temporal o permanentemente¹.

La Ley, en efecto, al regular el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio de la República, dispone que los mismos pueden ser admitidos en dos categorías: como no migrantes o como migrantes, los que a la vez pueden ser migrantes temporales y migrantes permanentes (Art. 6).

En cuanto a los extranjeros no migrantes, son los que ingresen al territorio de la República con el propósito de permanecer por un tiempo limitado de 90 días, sin ánimo de fijar en él su domicilio permanente ni el de su familia. Estos extranjeros no migrantes, no pueden ejercer actividades que involucren remuneración o lucro.

1 Así se establece en el artículo 3 de la *Ley de Extranjeros y Migración* de 2004 (G.O. N° 37.944 de 24-05-2004). Esta Ley derogó la Ley de Extranjeros de 1937 (G.O. N° 19.329 de fecha 3 de agosto de 1937), la Ley sobre Actividades de los Extranjeros en el Territorio de Venezuela de 1942 (G.O. N° 20.835 de fecha 29 de junio de 1942) y la Ley de Inmigración y Colonización de 1966 (G.O. N° 1.032 Extraordinario de fecha 18 de julio de 1966), así como todas las demás disposiciones que la contravengan.

En cuanto a los extranjeros migrantes, como se dijo, son de dos categoría: los migrantes temporales, que son los que ingresan al territorio de la República con el ánimo de residir en él temporalmente, mientras duren las actividades que dieron origen a su admisión; y los migrantes permanentes, que son los que tienen autorización para permanecer indefinidamente en el territorio de la República.

2. *Régimen legal*

Los extranjeros migrantes, al igual que todos los extranjeros que se encuentren en el territorio de la República, están sujetos a las disposiciones de la Ley de Extranjería y Migración, independientemente de su condición migratoria (Art. 2). Los únicos exceptuados respecto de la aplicación de dicha Ley son, “los representantes diplomáticos y consulares, los miembros de las misiones diplomáticas y oficinas consulares, representantes, delegados y, demás miembros de organismos internacionales y organizaciones especializadas de las cuales sea parte la República y sus familiares, acreditados ante el Gobierno Nacional” (Art. 4).

II. EL RÉGIMEN DEL INGRESO DE LOS EXTRANJEROS MIGRANTES

1. *Documentos necesarios para la admisión*

A los fines de su admisión, ingreso, reingreso y permanencia en el territorio de la República, los extranjeros deben estar provistos de un pasaporte válido y vigente, con el respectivo visado u otro documento que autorice su ingreso o permanencia en el territorio de la República, de conformidad con las normas de la materia o tratados internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela (Art. 7).

Conforme al artículo 10 de la Ley, los extranjeros deben presentarse en el Terminal de entrada, “con el respectivo pasaporte debidamente

visado o con un documento que autorice su ingreso o permanencia en el territorio de la República”.

En el caso de extranjeros representantes de cualquier religión o culto que ingrese al territorio de la República para ejercer actividades de carácter religioso u otras relacionadas con éste, deberá obtener la respectiva autorización del Ejecutivo Nacional a través del órgano competente, acreditando para ello su condición (art. 111).

2. *El control del ingreso de extranjeros*

Corresponde a las autoridades competentes en materia de extranjería y migración que se encuentren ubicadas en los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas, impedir el ingreso al territorio de la República de todos aquellos extranjeros y extranjeras que no reúnan los requisitos establecidos en la Ley para su ingreso legal al país (art. 12).

Quedan a salvo, sin embargo, los convenios suscritos por la República que exoneren a los extranjeros o extranjeras del cumplimiento de alguno de los requisitos para su ingreso, previstos en esta Ley.

3 *Los lugares de ingreso y salida de los extranjeros*

El ingreso y salida de los extranjeros del territorio de la República, sólo puede efectuarse por los terminales legalmente habilitados a dichos efectos.

En caso de emergencia o necesidad comprobada, dichos lugares habilitados pueden ser cerrados al tránsito de personas en forma temporal y, en este caso, conforme lo indica el artículo 9 de la Ley, el acto que contenga esta medida se debe dictar “de conformidad con las normas especiales sobre situaciones de excepción”, y debe estar debidamente motivado tanto en los hechos como en el derecho en el cual se fundamenta. En consecuencia, para que se produzca el “cierre de las fronteras”, el acto respectivo debe dictarse en el marco de los estados

de excepción que regulan los artículos 337 de la Constitución y la ley Orgánica de los Estados de Excepción².

4 *La negativa a la admisión de extranjeros*

No pueden ser admitidos en el territorio de la República, los extranjeros que se encuentren comprendidos en los siguientes supuestos que enumera el artículo 8 de la Ley:

1. Cuando su presencia pueda ser motivo de alteración del orden público interno o comprometa las relaciones internacionales de la República, como consecuencia de ser requeridos por autoridades extranjeras policiales o judiciales, en relación con causas penales comunes o que estén vinculados con organizaciones delictivas nacionales e internacionales.
2. Cuando hayan sido expulsados del territorio de la República y permanezca vigente la prohibición de entrada al país.
3. Cuando hayan cometido delito que la ley venezolana califique y castigue, mientras no hubieren cumplido condena o hubiere prescrito la acción o pena en el país donde ésta se originó.
4. Cuando hayan incurrido en violaciones a los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario o a las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales, en los cuales sea parte la República.
5. Cuando estén relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o realicen actividades conexas.
6. Cuando padecan enfermedades infectocontagiosas u otras que comprometan la salud pública.

III. EL RÉGIMEN DE LAS AUTORIZACIONES LABORALES

1. *La prohibición de realizar trabajo remunerado a los extranjeros no migrantes*

Como se dijo, la categoría de extranjero no migrante corresponde a aquellos que ingresen al país con el propósito de permanecer por un

² Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (Ley N° 32), G.O. N° 37.261 de 15-08-2001

tiempo limitado de 90 días, sin ánimo de fijar en él su domicilio permanente ni el de su familia, estableciendo la Ley con carácter general que no pueden ejercer actividades que involucren remuneración o lucro.

Sin embargo, la Ley establece excepciones al regular las autorizaciones laborales, y disponer en su artículo 17 que no requieren autorización laboral para el ejercicio y las actividades que motivan su otorgamiento, a los extranjeros comprendidos en los siguientes supuestos:

1. Los científicos, profesionales, técnicos, expertos y personal especializado que vengan a asesorar, dar entrenamiento o ejecutar labores de carácter temporal, por un lapso no mayor de noventa (90) días.
2. Los técnicos y profesionales invitados por entes públicos o privados para cumplir con labores académicas, científicas o de investigación, siempre que estas actividades no excedan el lapso de noventa (90) días.
3. Los que ingresen al territorio de la República para desarrollar actividades amparadas en los convenios de cooperación y asistencia técnica.
4. Los trabajadores de medios de comunicación de otros países debidamente acreditados para el ejercicio de las actividades informativas.
5. Los miembros de misiones científicas internacionales, que realicen trabajos de investigación en el territorio de la República autorizados por el Estado venezolano.

Se trata, por tanto de supuestos de extranjeros no migrantes, que pueden realizar actividades remuneradas o lucrativas.

2. *La autorización laboral en los casos de los extranjeros trabajadores migrantes*

El artículo 16 de la Ley exige que todas aquellas personas que en virtud de un contrato de trabajo deban ingresar al territorio de la República, debe obtener la autorización laboral por parte del Ministerio del Trabajo. La tramitación para la obtención de la correspondiente autorización debe efectuarla el extranjero, a través de su contratante en el territorio de la República.

En el caso de trabajadores extranjeros que aspiren a ser contratados por empresas pertenecientes a la República, los Estados y los Municipios, los mismos deben igualmente obtener la correspondiente autorización laboral (art. 19).

El visado que autorice la permanencia en el territorio de la República de los extranjeros, debe tener la misma duración que la autorización laboral y debe ser renovado siempre que subsistan las mismas circunstancias que determinaron su otorgamiento (art. 20).

En los casos de contratación de trabajadores extranjeros de la agricultura, la pesca y la ganadería, en áreas específicas y por tiempo necesario, corresponde a los Ministerios de Tierras, del Trabajo y de Producción y el Comercio, dictar mediante resolución conjunta, los procedimientos respectivos (art. 18).

IV. EL CONTROL DE LOS EXTRANJEROS MIGRANTES

1. *La Administración competente para la aplicación de la ley*

A. *El Ministerio del Interior y Justicia*

Conforme al artículo 5 de la Ley, el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio con atribuciones en el área de extranjería y migración, que conforme al Decreto N° 3464 de 9 de febrero de 2005 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central³ es el Ministerio del Interior y Justicia, se considera la autoridad migratoria nacional encargada de la admisión, ingreso, permanencia, registro, salida y reingreso de los extranjeros y extranjeras. Sin embargo, los Ministerios con competencia en las áreas de Relaciones Exteriores, de la Defensa y del Trabajo, deben coadyuvar en la ejecución de los objetivos de esta Ley.

3 G.O. N° 38.124 de 09-02-2005.

B. *La Comisión Nacional de Migración*

Otro órgano regulado en la Ley es la Comisión Nacional de Migración, la cual conforme al artículo 28 tiene como objeto asesorar al Ejecutivo Nacional en el cumplimiento de las funciones establecidas en esta Ley.

Esta Comisión Nacional de Migración debe estar integrada por el Ministro del Interior y de Justicia, quien la preside y por un representante de los Ministerios con competencia en Relaciones Exteriores, Defensa, Educación, Pesca, Agricultura, Ganadería, Producción, Comercio y Trabajo.

2 *El Registro Nacional de Extranjeros*

El artículo 21 de la Ley, creó el “Registro Nacional de Extranjeros y Extranjeras”, el cual debe ser llevado por el Ministerio de Interior y Justicia; correspondiendo al Reglamento de la Ley, determinar su estructura, organización y funciones.

Además, el Ministerio del Interior y Justicia, en ejercicio de sus funciones de control, debe mantener actualizadas las estadísticas sobre los extranjeros y extranjeras que se encuentren en el territorio de la República, independientemente de su categoría migratoria (art. 27).

3. *Las participaciones obligatorias*

A *El deber de los propietarios o administradores de hoteles, pensiones o sitios de hospedaje*

Los propietarios o administradores de hoteles, pensiones o sitios de hospedaje deben llevar un registro de los usuarios extranjeros con referencia expresa a la nacionalidad, el cual deben enviar cada 8 días al Registro Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de lo que se establezca en el reglamento respectivo (art. 25).

B *El deber de los propietarios o administradores de empresas de transporte*

Los propietarios o administradores de las empresas de transporte de pasajeros y turismo nacional o internacional deben llevar un registro de los usuarios extranjeros, el cual también deben remitir cada ocho 8 días al Registro Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de lo que se establezca en el reglamento respectivo (art. 26).

C *Los deberes de los empleadores de personas extranjeras*

Dispone el artículo 24 de la Ley, que todo empleador de una persona extranjera debe exigirle la presentación de los documentos de identificación y notificar por escrito al Registro Nacional de Extranjeros los términos y condiciones de la relación laboral, así como la terminación de la misma, dentro de un lapso de treinta (30) días siguientes al acto respectivo.

De conformidad con las disposiciones que al efecto establezca el Reglamento, todo empleador o contratista de trabajadores extranjeros o trabajadoras extranjeras debe comprometerse con la autoridad competente en materia de extranjería y migración, a pagar el pasaje de regreso del extranjero o extranjera y de su familia, si fuera el caso, a su país de origen o de última residencia, dentro del mes siguiente a la terminación del contrato.

D. *El deber de las autoridades de registro civil*

La autoridad civil ante la cual se realice el cambio de estado civil de un extranjero lo debe participar al Registro Nacional de Extranjeros, dentro de los ocho (8) días siguientes al acto, conforme con lo que al efecto establezca el Reglamento (art. 22).

E. *El deber de los centros penitenciarios*

Los directores de centros penitenciarios deben remitir trimestralmente al Registro Nacional de Extranjeros, una lista actualizada de las personas extranjeras que estén recluidas por haber sido condenadas mediante sentencia definitivamente firme (art. 23). Esta participación también se debe hacer de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley.

V. LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS EXTRANJEROS MIGRANTES

1. *El régimen de los derechos*

Conforme al artículo 13 de la Ley, y siguiendo lo dispuesto en la Constitución, los extranjeros que se encuentren en el territorio de la República, tienen los mismos derechos que los nacionales, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. La excepción se refiere, básicamente a los derechos políticos.

En efecto, el artículo 45 de la Constitución de 1961 establecía que “Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que los venezolanos, con las limitaciones o excepciones establecidas por esta Constitución y las leyes”. Aún cuando esta norma desapareció del texto constitucional de 1999, es evidente que el mismo principio sigue rigiendo en la forma expresada, el cual derivada del derecho fundamental a la igualdad ante la ley (art. 21) y de la regulación expresa de la nacionalidad y ciudadanía, lo que por exclusión permite construir el régimen de los extranjeros.

La consecuencia de regular expresamente en la Constitución a la ciudadanía, es la reserva que hace el artículo 40, de los derechos políticos como privativos de los venezolanos, salvo las excepciones estable-

cidas en la Constitución; las cuales se refieren sólo a la posibilidad, para los extranjeros, de votar en las elecciones locales.

En efecto, el artículo 64 de la Constitución dispone como excepción que el voto para las elecciones municipales, parroquiales y estadales se hará extensivo a los extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad, no sujetos a interdicción civil o inhabilitación política, con más de 10 años de residencia en el país, con las limitaciones establecidas en esta Constitución y en la ley.

2. *La referencia particular al derecho a la tutela judicial efectiva*

El artículo 15 de la Ley, por otra parte, y en forma destacada, garantiza a los extranjeros el derecho a la tutela judicial efectiva en todos los actos que a éstos conciernan o se encuentren involucrados, con respecto a su condición de extranjeros.

Agrega la norma que en los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería, se deben respetar, en todo caso, las garantías previstas en la Constitución y las leyes, sobre el procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a la publicidad de los actos, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones.

Los actos y resoluciones administrativos adoptados en relación con los extranjeros, además, deben ser recurribles, de conformidad con lo establecido en la Ley y en la ley que regule los procedimientos administrativos, en cuanto le sean aplicables.

Igualmente, la ejecución de los actos administrativos relacionados con la condición o situación jurídica de los extranjeros, se debe realizar de conformidad con lo establecido en la Ley y por las disposiciones consagradas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en cuanto le sean aplicables.

3. El régimen de los deberes

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley, los extranjeros que se encuentren en el territorio de la República, sin perjuicio de los deberes y obligaciones que le impone la Constitución y las leyes, deben cumplir los siguientes deberes:

1. Cumplir con los requisitos y las condiciones de identificación, permanencia y localización en Venezuela, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.
2. Presentar ante las autoridades los documentos que los identifiquen, cuando le sean requeridos. Dichos documentos, no podrán ser retenidos por las autoridades.
3. Inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros y Extranjeras del ministerio con competencia en la materia, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ingreso, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de esta Ley, cuando ingrese al territorio de la República como migrante temporal o adquiera la categoría de migrante permanente.
4. Consignar ante la autoridad civil correspondiente al lugar de su domicilio, las actas relativas al estado civil debidamente legalizadas o con la respectiva apostilla, tanto de ellos como de su familia, y participar cualquier cambio de domicilio o residencia, cuando se trate de extranjeros y extranjeras que se encuentren comprendidos en las categorías de migrantes temporales y permanentes.
5. Mantener vigente el visado u otro documento que autorice su permanencia en el territorio de la República.
6. Presentarse en el lapso fijado cuando sean citados por la autoridad competente.

VI EL RÉGIMEN SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO

1. Órgano competente para imponer sanciones y sus atribuciones

Corresponde al Ministro del Interior y de Justicia, o el funcionario que él delegue, la imposición de las sanciones establecidas en la Ley, de conformidad con lo previsto en las leyes que regulan los actos y procedimientos administrativos y demás normas aplicables; en particular, por supuesto, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Las sanciones que puede imponer el Ministro del Interior y de Justicia o el funcionario que él delegue, en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley, conforme al artículo 35 de la ley, son las siguientes: amonestación, las multas o la deportación del territorio de la República.

En todo caso se debe abrir una articulación probatoria de 72 horas para determinar el tipo de sanción aplicable, de acuerdo a la gravedad o reincidencia de la infracción cometida, en la forma que determine el reglamento respectivo y sin perjuicio de la aplicación de las demás normas previstas en la Ley.

La persona incursa en alguna de esas medidas dispone de un lapso de 5 días hábiles para ejercer los recursos, excepciones y defensas, conforme a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

2. *Las multas*

Corresponde al Ministerio del Interior y Justicia la imposición de las multas a los extranjeros en los siguientes casos que enumera el artículo 36 de la ley:

1. El extranjero y extranjera que incumpla la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros y Extranjeras y de hacer las participaciones respectivas en los términos contenidos en el artículo 14 de esta Ley, será sancionado con una multa de diez unidades tributarias (10 U.T.).
2. Las personas naturales y jurídicas a las que se refieren los artículos 24, 25 y 26 de esta Ley, que infrinjan las obligaciones allí previstas, serán sancionadas con cincuenta unidades tributarias (50 U.T.).
3. Todo empleador que contrate extranjeros y extranjeras ilegales para la prestación de determinado servicio, será sancionado con doscientas unidades tributarias (200 U.T.).

Una vez que se impongan las multas respectivas, el infractor debe proceder a su pago dentro de los 8 días siguientes a la notificación de la decisión. Vencido dicho lapso, en caso de su inobservancia, se debe aplicar lo previsto en el Código Orgánico Tributario (art. 37).

3. *La deportación y expulsión de extranjeros*

A. *Las causas de la deportación*

Tal como lo precisa el artículo 38 de la Ley, estan sujetos a la medida de deportación del territorio de la República, los extranjeros que estén incursos en alguna de las siguientes causales:

1. Los que ingresen y permanezcan en el territorio de la República sin el visado correspondiente.
2. Los que hayan ingresado al territorio de la República para desempeñar actividades sometidas a la autorización laboral y no cumplan con dicho requisito.
3. Los que no cumplan con la obligación de renovar el visado dentro del lapso que establece el Reglamento de esta Ley.
4. Los trabajadores extranjeros y las trabajadoras extranjeras cuando ejecuten trabajos distintos a aquellos para los cuales fueron contratados y en una jurisdicción diferente a la autorizada.
5. Haber sido multado por la autoridad competente en materia de extranjería y migración, dos (2) o más veces y ser renuente a la cancelación de la misma.

B. *Las causas de expulsión*

Sin perjuicio de las sanciones que las demás leyes establezcan, conforme se dispone en el artículo 39 de la Ley, los extranjeros deben ser expulsados del territorio de la República en los siguientes casos:

1. Los que hayan obtenido o renovado el visado que autoriza su ingreso o permanencia en el territorio de la República, con fraude a la ley.
2. Los que se dediquen a la producción, distribución o posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o demás actividades conexas.
3. Los que encontrándose legalmente en el territorio de la República, propicien el ingreso legal o ilegal de otro extranjero o extranjera con falsas promesas de contrato de trabajo, promesas de visas o autorización de trabajo.

4. El que comprometa la seguridad y defensa de la Nación, altere el orden público o esté incurso en delitos contra los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario o las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales, en los cuales sea parte la República.

C. *El procedimiento*

a. *La obligación de notificar a la autoridad*

El artículo 40 de la Ley impone a toda autoridad que tenga conocimiento de que un extranjero se encuentra incurso en alguna de las causales de deportación o expulsión previstas en esta Ley, el deber de notificar sin dilaciones al Ministerio del Interior y Justicia, a los fines del inicio del procedimiento administrativo correspondiente.

b. *El inicio del procedimiento administrativo*

Para la imposición de las sanciones previstas en la Ley, el Ministerio del Interior y Justicia puede proceder de oficio o por denuncia.

Cuando el Ministerio del Interior y Justicia tenga conocimiento de que un extranjero se encuentre incurso en alguna de las causales previstas en la Ley para proceder a su deportación o expulsión, según sea el caso, conforme lo dispone el artículo 41 de la Ley, que el órgano competente debe ordenar el inicio del correspondiente procedimiento administrativo mediante auto expreso. Dicho órgano será el que a tal efecto designe el Ministro del Interior y Justicia mediante Resolución

De la apertura del procedimiento administrativo de deportación o expulsión se debe notificar al extranjero interesado dentro de las 48 horas siguientes al inicio de dicho procedimiento. Dichas notificaciones de inicio de procedimientos administrativos deben indicar expresamente los hechos que motivan el inicio del mismo, así como el derecho que tiene el extranjero interesado para acceder al expediente administrativo y de disponer del tiempo que considere necesario para examinar el respectivo expediente, para lo cual puede estar asistido de abo-

gado de su confianza (art. 42). Esta notificación se debe practicar de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

c. *Las medidas cautelares*

A los fines de garantizar la ejecución de las medidas de deportación o expulsión, la autoridad competente del Ministerio, en el auto de inicio del respectivo procedimiento administrativo, conforme se dispone el en artículo 46 de la Ley, puede imponer al extranjero que se encuentre sujeto al procedimiento de deportación o expulsión, las medidas cautelares siguientes:

1. Presentación periódica ante la autoridad competente en materia de extranjería y migración.
2. Prohibición de salir de la localidad en la cual resida sin la correspondiente autorización.
3. Prestación de una caución monetaria adecuada, para lo cual deberá tomarse en cuenta la condición económica del extranjero o extranjera.
4. Residenciarse mientras dure el procedimiento administrativo en una determinada localidad.
5. Cualquier otra que estime pertinente a los fines de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad competente, siempre que dicha medida no implique una privación o restricción del derecho a la libertad personal.

La imposición de estas medidas cautelares no puede exceder de 30 días, contados a partir de la fecha en que se dictó la medida.

d. *La audiencia oral ante la autoridad competente*

En el mismo auto de apertura del inicio del procedimiento administrativo antes indicado, se le debe informar al extranjero que debe comparecer ante la autoridad competente en materia de extranjería y migración, al tercer día hábil siguiente a su notificación, a los fines de que se realice una audiencia oral en la cual pueda exponer los alegatos

para ejercer su derecho a la defensa, para lo cual podrá disponer de todos los medios de prueba que considere pertinentes (art. 43).

La celebración de la audiencia oral puede postergarse hasta por 3 días hábiles, siempre que el extranjero interesado lo hubiere solicitado mediante escrito debidamente motivado.

El extranjero interesado puede estar asistido de abogado de su confianza en la audiencia oral; y si no habla el idioma castellano o no puede comunicarse de manera verbal se le debe proporcionar un intérprete.

Si el extranjero interesado solicite en dicha audiencia que se le reconozca la condición de refugiado, se debe tramitar el asunto conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Refugiados y Asilados.

f. *La decisión administrativa*

Luego de haberse realizado la audiencia oral antes indicada, el órgano competente del Ministerio del Interior y Justicia debe decidir dentro de las 72 horas siguientes a la celebración de dicha audiencia oral; en forma escrita y mediante acto administrativo debidamente motivado, que debe ajustarse a lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (art. 44). El artículo 50 de la Ley insiste en establecer que la expulsión de extranjeros se debe hacer mediante acto motivado, dictado por el Ministerio del Interior y Justicia, en la cual se fijará el término para el cumplimiento de la misma.

La decisión de deportación o expulsión debe ser notificada al extranjero interesado dentro de las 24 horas siguientes, la cual debe contener el texto íntegro del acto administrativo con indicación de los recursos que procedan y de los lapsos para ejercerlos, así como de los órganos o tribunales ante los cuales deberán interponerse.

En las decisiones que acuerden la deportación o expulsión de extranjeros se debe fijar el término para el cumplimiento de tales decisiones, el cual comienza a transcurrir una vez que se hayan agotado todos

los recursos administrativos y judiciales previstos en la ley y dicha medida de deportación o expulsión hubiere quedado definitivamente firme.

g. *El recurso jerárquico*

Conforme lo dispone el artículo 45 de la Ley, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la decisión el extranjero interesado puede interponer recurso jerárquico ante el Ministro del Interior y Justicia; quien debe decidir mediante acto administrativo motivado, dentro de los 2 días hábiles siguientes a su interposición.

h. *La revocatoria de la visa o del documento de ingreso*

El Ministerio del Interior y Justicia mediante Resolución motivada, revocará la visa o documento de ingreso o permanencia en el territorio de la República a los extranjeros y extranjeras incursos en las causales de deportación y expulsión previstas en los artículos 38 y 39 de la Ley.

i. *Ejecución forzosa de la medida de expulsión*

En caso de incumplimiento del término fijado en el acto administrativo de expulsión (art. 50) para abandonar el territorio de la República, se debe proceder a la conducción del extranjero hasta el terminal de salida habilitado al efecto, donde la autoridad competente deba hacer efectiva la expulsión (art. 50).

D. *Los derechos de los extranjeros en los casos de deportación o expulsión*

a. *El derecho a trasladar bienes adquiridos*

Los extranjeros sometidos a las medidas de deportación o expulsión que posean bienes adquiridos legítimamente, tienen un lapso de un año, contado a partir de que la medida haya quedado definitivamente firme, para el traslado y colocación de los mismos, para lo cual

deben tener las facilidades necesarias. Dicho traslado lo pueden realizar por sí mismos o a través de representante o apoderado, debidamente autorizado mediante documento autenticado (art. 48).

b. *El derecho a percibir beneficios laborales*

Conforme se indica en el artículo 49 de la Ley, los trabajadores extranjeros sujetos a las medidas de deportación o expulsión tienen derecho a percibir los salarios, prestaciones sociales y todos los beneficios establecidos en la ley que regula las relaciones de trabajo, contrataciones colectivas y demás leyes sociales aplicables con ocasión de la relación laboral.

VII. EL RÉGIMEN DE LOS DELITOS Y DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

1. *Los delitos*

En la Ley de Extranjería y Migración se han regulado los siguientes delitos:

En *primer lugar*, el delito de facilitación de ingreso ilegal, establecido en el artículo 52, mediante el cual se castiga con pena de prisión de 4 a 8 años, toda persona que facilite o permita el ingreso ilegal de extranjeros y extranjeras al territorio de la República.

En *segundo lugar*, el delito de facilitación de ingreso ilegal en el caso de los funcionarios públicos, establecido en el artículo 59 de la Ley que establece, que el funcionario público, o autoridad policial o militar que por cualquier medio, favorezca o induzca, por acción u omisión, el ingreso o salida del territorio de la República de personas de manera clandestina o con fraude al procedimiento de control migratorio establecido en nuestro ordenamiento jurídico, será penado con presidio de 4 a 8 años y no podrá volver a ejercer ningún cargo en la Administración Pública por un lapso de 10 años.

En *tercer lugar*, el delito de explotación laboral de migrantes, establecido en el artículo 53 de la ley, mediante el cual se castiga con pena de prisión de 4 a 8 años, a “quienes empleen a extranjeros y extranjeras cuya estadía en el territorio de la República sea ilegal, con el objeto de explotarlos como mano de obra en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos laborales que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual”. Con igual pena debe ser castigado el que simulando contrato o colocación, o valiéndose de engaño semejante, determine o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país.

En *cuarto lugar*, el delito de inmigración ilícita, establecido en el artículo 55 de la Ley, mediante el cual se castiga con pena de prisión de 4 a 8 años, al que promoviere o favoreciere por cualquier medio la inmigración ilícita de extranjeros y extranjeras al territorio de la República.

En *quinto lugar*, el delito de tráfico ilegal de personas establecido en el artículo 56 de la Ley, mediante el cual se castiga con pena de prisión de cuatro 4 a 8 años, a las personas naturales y los representantes de las personas jurídicas que, por acción u omisión, promuevan o medien el tráfico ilegal de personas en tránsito o con destino al territorio de la República. El artículo 57 de la Ley establece, como agravante, que los que realicen estas conductas con ánimo de lucro, o empleando violencia, intimidación, engaño o abusando de una situación de necesidad de la víctima, de su género o de los grupos vulnerables, serán castigados con pena de prisión de 8 a 10 años.

Además para todos los delitos antes indicados, el artículo 58 de la Ley dispone que se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior a las previstas en los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de esta Ley, cuando en la comisión de los hechos se hubiese puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas o la víctima.

2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Conforme al artículo 54 de la Ley, cuando los hechos previstos en los artículos 52 (delito de facilitación de ingreso ilegal) y 53 (delito de explotación laboral de migrantes) de la Ley se atribuyeran a personas jurídicas, la pena señalada debe imponerse a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello.

Caracas, abril 2005.

THE LEGAL SITUATION OF MIGRANTS IN VENEZUELA

Allan R. Brewer-Carías

Professor, Central University of Venezuela

Vice-President, International Academy of Comparative Law

I. ALIEN MIGRANTS AND THEIR LEGAL REGIME

1. *The definition of migrant*

In Venezuela, all who are not considered to be Venezuelans are legally considered to be aliens. Within these aliens, the Statute on Aliens and Migration of 2004, considers as migrants, those aliens who enter the territory of the Republic to reside in it temporal or permanently⁴¹.

The current Statute, by regulating the access and permanency of aliens into the territory of the Republic, establishes that these can be admitted in two categories: as non migrants or as migrants which can be temporary migrants and permanent migrants (Art. 6).

As to the non migrant aliens, these are the people who enter the territory of the Republic to remain in it for a limited time of 90 days, without having the intention to establish his or his family's permanent residence in it. These non migrant aliens can not perform activities that involve remuneration or profit.

As to the migrant aliens, as said before, these can have two categories: temporary migrants, those entering the territory of the Republic

⁴ As established in article 3 of the Statute governing aliens and migration of 2004 (O.G. N° 37.944 of 05-24-2004). This Statute derogated the Aliens Statute of 1937 (O.G. N° 19.329 dated August 3, 1937), the Statute about Alien activities in the Venezuelan territory of 1942 (O.G. N° 20.835 dated June 29, 1942) and the Immigration and Colonization Statute of 1966 (Extraordinary O.G. N° 1.032 dated July 18, 1966), as well as all other dispositions that violate it.

with the intention of residing in it temporarily while the activities that origin their admission last; and the permanent migrants, those who have authorization to remain indefinitely in the territory of the Republic.

2. Legal system

Migrant aliens, just like every alien in the territory of the Republic, are subjected to the Statute governing aliens and migration, independently of their migratory condition (Art. 2). The only ones excluded from the application of said Statute are “diplomatic and consular representatives, members of diplomatic missions and consular offices, representatives, delegates and other members of international bodies and specialized organizations of which the Republic and their families are part of, accredited before the National Government” (Art. 4).

II. ENTRANCE SYSTEM FOR MIGRANT ALIENS

1. Necessary documents for admission

For purposes of admission, entrance, re-entry and permanence in the territory of the Republic, migrants must have a valid passport, with the respective visa or other document authorizing his/her entry or permanence in the territory of the Republic, according to the applicable statutes and international treaties signed and ratified by the Republic of Venezuela (Art. 7).

According to article 10 of the Statute, aliens must present themselves at the entry Terminal “with their passport with a valid visa or a document authorizing their entry or permanence in the territory to the Republic”

In the case of the alien representative of any religion or cult who enters the territory of the Republic to perform religious activities or any other activity related to it, must obtain the respective authoriza-

tion, accrediting his condition, from the National Executive through the competent authority (Art. 111).

2. Entry control of aliens

It is up to the competent authorities in matters of aliens and migration located in ports, airports and border zones, to impede the entrance to the territory of the Republic, of those aliens who do not comply with the requirements established by the Statute for their legal entry into the country (Art. 12). Exception is made in cases set forth in international agreements signed by the Republic exonerating aliens from complying with any of the requirements for their entry, established by the Statute.

3. Entry and departure places for aliens

The entry and departure of aliens from the territory of the Republic can only be made through Terminals legally authorized for said effects.

In case of emergency or proved need, said legally authorized places can be closed for the temporal traffic of people and, in this case, in accordance to article 9 of the Statute, the Act containing this measure must be dictated "according to the special standards about exception situations", and must be dully motivated in the facts as well as in the law on which it is based. In consequence, in order to have the "closing of borders", the respective Act must occur in the frame of the state of exception regulated by articles 337 of the Constitution and the State of Exception Organic Statute⁵.

4. The negative towards the admission of aliens

Aliens, who are compromised in the following cases listed in article 8 of the Statute, can not be admitted into the territory of the Republic:

⁵ Organic Statute of Exception Status (Statute N 32), O.G. N° 37.261 de 08-15-2001.

1. When his presence can be motive for alteration of the domestic public order or compromises the international relations of the Republic, in consequence of being requested by foreign police or judicial authorities, for common criminal causes or for being connected to national or international criminal organizations.
2. When they have been deported from the territory of the Republic and the prohibition of entrance into the country is still in effect.
3. When he had committed a felony qualified and punished by Venezuelan laws without passing sentence or having prescribed the action or sentence in the country where it happened.
4. When they had committed violations of Human Rights, Humanitarian International Law or of the dispositions content in international instruments of which the Republic is part of.
5. When they are involved in the traffic of stupefiant or psychotropic substances or performing similar activities.
6. When they suffer from infect-contagious diseases or others that might risk public health.

III. THE LABOR AUTHORIZATION SYSTEM

1. *Prohibition for non migrant aliens to perform a remunerated activity.*

As previously said, the non migrant alien category correspond to those who enter the country with the purpose of staying for a 90 day limited time, without having the intention of setting permanent residence for him or his family in it, establishing the Statute, in general, that they can not perform activities that involve remuneration or profit.

However, the Statute establishes exceptions by regulating labor authorizations, and establishing in its article 17, that non migrant aliens in the following cases do not require labor authorizations for the exercise and activities that motivate their granting:

1. Scientifics, professionals, technicians, experts and specialized personnel who come to counsel, provide training or perform temporal labor, for a period of no more than ninety (90) days.

2. Technicians and professional invited by public or private entities to perform academic, scientific or research activities, as long as these activities do not exceed the ninety (90) day period.
3. Those who enter the territory of the Republic to develop activities protected by cooperation and technical assistance agreements.
4. Workers of foreign media dully accredited for the exercise of informative activities.
5. Members of international scientific missions performing research works in the territory of the Republic authorized by the Venezuelan government.

2. Labor authorization in cases of migrant working aliens

Article 16 of the Statute set forth that every person who enter the territory of the Republic under a work contract, must obtain the labor authorization from the Ministry of Labour. The procedure to obtain the corresponding authorization must be performed by the alien, through his contracting party, in the territory of the Republic.

In case of working aliens who want to be contracted by a public enterprise (that belong to the Republic, the States and Municipalities), they must also obtain the corresponding labor authorization (Art. 19).

The visa authorizing the permanence of the aliens in the territory of the Republic must have the same length of duration as the labor authorization and must be renovated when the circumstances that determined its issuance, persists (Art. 20).

In the cases of the employment of aliens workers for agriculture, fishery and cattle rising, in specific areas and for a specific period of time, corresponds to the Ministries of Lands, of Labour and Production and Commerce, to issue the respective procedures, trough joint resolution (Art. 18).

IV. CONTROL OF MIGRANT ALIENS

1. Competent administration for the application of the Statute

A. Ministry of the Interior and Justice

The Government authority with attributions in the area of governing aliens and migration, according to Decree N° 3416 dated January 11, 2005 about Organization and Functioning of the Central Public Administration⁶, is the Ministry of the Interior and Justice. This Ministry is therefore, the national migratory authority in charge of the admission, entrance, permanence, registry, departure and reentry of aliens. However, the Ministries with competence in the areas of Foreign Affairs, and Defense and Labour, must help in the execution of the objectives of the Statute.

B. *The National Migration Commission*

Another regulated body in the Statute is the National Migration Commission which, according to article 28, has the object of advising the National Executive to comply with the functions established in the Statute.

This National Migration Commission is integrated by the Minister of the Interior and Justice, who presides it, and by a representative of the Ministries with competence in Foreign Affairs, Defense, Education, Fishery, Agriculture, Cattle rising, Production, Commerce and Labour.

2. *The National Registry of Aliens*

Article 21 of the Statute created the “National Registry of Aliens” (both male and female) in the Ministry of the Interior and Justice.

The Ministry of the Interior and Justice, in exercise of its control functions, must continuously update the statistics about both female and male aliens in the territory of the Republic, independently of their migratory category (Art. 27).

3. *Obligatory information*

A. *The duty of hotel, boarding houses and lodging places .*

⁶ Oficial .Gazette N° 38.112, 01-21-2005

Owners or administrators of hotels, boarding houses or lodging places must keep a registry of their alien users, specifically about their nationality; this information must be sent every 8 days to the National Registry of Aliens (art. 25).

B. *The duty of the owners or administrators of transport businesses*

Owners or administrators of the passenger transportation and national and international tourism companies must keep a registry of their alien users; this information must also be sent every 8 days to the National Registry of Aliens (art. 26).

C. *The duties of the employers of alien people*

Article 24 of the Statute states that every employer of an alien person must demand from him/her the presentation of the identification documents and inform to the National Registry of Aliens, in writing, the terms and conditions of the labor relation, as well as its termination within a 30 day period following the respective event.

Additionally, every employer or contractor of aliens workers must compromise itself to the competent authority in the matter of aliens and migration, to pay for the return ticket of the alien and his/her family, if that was the case, back to his/her country of origin, or of last residence, within the following month of the termination of his contract.

D. *The duty of the civil registry authorities*

The civil authority before which a change of the civil status of an alien is performed, must inform the National Registry of Aliens of it, within an 8 day period after the event (art. 22).

E. *The duty of the penitentiaries*

The directors of the prisons must send every 3 months an updated list of the alien persons imprisoned for having been found guilty by final judgment (art. 23).

V. CIVIL RIGHTS AND DUTIES OF MIGRANT ALIENS

1. The civil rights system

According to Article 13 of the Statute, and as stated in the Constitution, aliens who are living in the territory of the Republic, have the same rights as nationals, with no more limitations than those stated in the Constitution and the laws. The exception refers basically to their political rights.

In effect, article 45 of the Constitution of 1961 established that "Aliens have the same rights and duties as Venezuelans, with the limitations or exceptions established by this Constitution and the laws". Even though this rule disappeared from the constitutional text of 1999, the same principle applies derived from the fundamental right to equal protection (art. 21). On the other hand, the consequence of regulating the Venezuelan citizenship in the Constitution is the reserve made by article 40 of the political rights being exclusive for Venezuelans, except the possibility for aliens, to vote in local elections established in the Constitution. In this regard, article 64 of the Constitution, set forth that the vote for municipal, parish and states elections will be extended for aliens who have reached the age of 18, are not subjected to the loss of civil rights or political disability and with more than 10 years of residence in the country.

2. The particular reference to the right to the effective protection of the court

On the other hand, and in an express way, article 15 of the Statute guarantees aliens the right to the effective protection of the court in all the acts concerned by them or in which they are involved, in regards to their alien condition.

The rule adds that in all administrative procedures established in alien matters, the guarantees foreseen in the Constitution and the Statutes about the administrative procedure, especially in regard to the publicity of the acts, contradiction, hearing of the interested party and motivation of the resolutions, must be respected in every case.

Additionally, acts and administrative resolutions adopted in relation to aliens must be reviewable, in conformity to the Statute regulating administrative procedures when applicable.

In the same way, the application of the administrative acts related to the condition or judicial situation of the aliens, must be performed as established by the Organic Statute of Administrative Procedures when applicable.

3. *The duties system*

According to article 14 of the Statute, aliens who remain in the territory of the Republic, without prejudice of the duties and obligations imposed by the Constitution and the Statutes, must comply with the following duties:

1. To comply with the requirements and conditions of identification, permanence and address in Venezuela, as established in the legal system.
2. To present, before the authorities, the documents that identify them, any time they are asked to do so. Said documents may not be retained by the authorities.
3. To register in the National Registry of Aliens in the ministry with competence in the matter, within the following 30 days of their arrival, when entering the territory of the Republic as temporary migrant or acquiring the category of permanent migrant.
4. To consign, before the civil authority corresponding to his/her place of domicile, the certifications relative to the marital status duly legalized or with the respective apostille, his/hers as well as the family information, and particularly of any change of domicile or residence when the matter is about aliens located in the categories of temporal and permanent migrants.
5. To keep the visas or any other document, authorizing his permanence in the territory of the Republic, in force.
6. To appear before the competent authority in the time lapse fixed for the citation.

VI. THE DISCIPLINARY ADMINISTRATIVE REGIME

1. *Competent organ to impose sanctions and its attributions*

the Ministry of the Interior and Justice, or the functionary delegated by it, has the attribution to impose the sanctions established by the Statute, following the rules established in the Organic Statute of Administrative Procedures.

In case of failure to comply with the obligations foreseen in the Statute, as stated in article 35, the sanctions that can be imposed by the Ministry of the Interior and Justice or by the functionary it delegates are admonishment, fines or the deportation from the territory of the Republic.

A 72 hour long pleading hearing must be opened in every case in order to determine the type of sanction applicable according to the seriousness or recurrence of the infringement.

The person incurred in any of these measures has a period of 5 working days to make the appeal, exceptions and defenses according to the Organic Statute of Administrative Procedures.

2. *The fines*

The Ministry of the Interior and Justice has the authority to impose the fines to aliens in the following cases listed in article 36 of the Statute:

1. **The alien who fails to fulfill the duty of registering in the National Registry of Aliens and of making the respective participations in the terms contained in article 14 of the Statute, will be sanctioned with a fine of ten tributary units (10 U.T.).**
2. **Natural persons or corporations referred to in articles 24, 25 and 26 of the Statute, who infringe the obligations there foreseen, will be sanctioned with fifty tributary units (50 U.T.).**
3. **Every employer who hires illegal aliens for the rendering of a determined service will be sanctioned with two hundred tributary units (200 U.T.).**

Once the respective fines are imposed, the alien must proceed to its payment within the 8 following days of the notification of the decision. After said period has expired, in case of its inobservance, the procedure foreseen in the Organic Tax Code must be applied (art. 37).

3. *Deportation and expulsion of aliens*

The Statute distinguishes between the deportation and the expulsion of aliens.

A. *Causes for deportation*

Just as stated in article 38 of the Statute, aliens who incur in any of the following causatives are subject of deportation from the territory of the Republic:

- 1. Those who enter and remain in the territory of the Republic without the correspondent visa.**
- 2. Those who have entered the territory of the Republic to perform activities submitted to the labor authorization and fail to comply with said requirement.**
- 3. Those who fail to comply with the obligation of renovating the visa within the lapse established by the Regulations of this Statute.**
- 4. Alien workers (female and male) who perform activities different from those they were hired for and in a different jurisdiction from the one they were authorized for.**
- 5. Those who have been fined twice or more times by the competent authority in matters of aliens and migration, and refuse to pay for it.**

B. *Causes for expulsion*

Without prejudice of the sanctions established by other laws, and according to article 39 of the Statute, aliens must be expelled from the territory of the Republic in the following cases:

- 1. Those who have obtained or renovated the visa authorizing their entrance or permanence in the territory of the Republic by fraud in law.**
- 2. Those dedicated to the production, distribution or possession of stupefactive and psychotropic substances or other related activities.**
- 3. Those who, while legally in the territory of the Republic, propitiate the legal or illegal entrance of another aliens under false promises of work contracts, visas or work authorizations.**
- 4. Those who compromises the security and defense of the Nation, alters the public order or is incurred in crimes against Human rights, Humanitarian International Law or against the dispositions content in international instruments of which the Republic is part of.**

C. *The procedure*

a. *The obligation of notifying the authority*

Article 40 of the Statute imposes the duty of notifying the Ministry of the Interior and Justice, without delays, to every authority that has knowledge of an alien incurring in any of the deportation or expulsion situations, in order to begin the corresponding administrative procedure.

b. *The opening of the administrative procedure*

For the imposition of the sanctions set forth in the Statute, the Ministry of the Interior and Justice can proceed *ex officio* or by accusation.

When the Ministry of the Interior and Justice has the knowledge of an alien incurring in any of the situations for deportation or expulsion, according to the case, as stated in article 41 of the Statute, the competent entity must order the opening of the corresponding administrative procedure by expressed order.

The interested party (alien) must be informed of the opening of the administrative procedure of deportation or expulsion within 48

hours following the start of said procedure. Said notifications must clearly indicate the facts motivating these proceedings, as well as the alien's right to have access to the administrative file and of having the time he considers necessary to examine it, for what he can be assisted by a lawyer of his trust (art. 42). This notification must be practiced according to the Organic Statute of Administrative Procedures.

c. *The precautionary measures*

The competent authority of the Ministry, in the order to open the respective administrative procedure, according to article 46 of the Statute, can impose the alien subjected to the procedure of deportation or expulsion, the following precautionary measures in order to guarantee the execution of these actions:

1. Periodical presentations before the competent authority in matters of aliens and migration.
2. Prohibition of leaving the location in which he resides without the corresponding authorization.
3. Presentation of an adequate monetary bail; for this, the economical status of the alien must be taken into consideration.
4. Move to a determined location while the administrative procedure lasts.
5. Any other measure that seems pertinent in order to guarantee the fulfillment of the decision of the competent authority, as long as said measure does not involve depravation or restriction of the right for personal freedom.

The imposition of these precautionary measures can not exceed 30 days, starting from the date of the decision.

d. *The oral hearing before the competent authority*

During the same opening order of the aforementioned administrative procedure, the alien must be notified of his duty to appear before the competent authority in matters of aliens and migration on the third working day following his notification, in order to have the oral hearing and present his plea according to his right to self defense, for which he would dispose of all the evidence means he considers necessary.

The celebration of the oral hearing can be postponed for up to 3 working days as long as the interested alien has requested it duly motivated in writing.

The interested alien may be assisted by a lawyer of his trust during the oral hearing; an interpreter can be assigned to him/her in case he/she does not speak Spanish or can not communicate verbally.

If the interested alien would request the acknowledgement of his/her refugee condition, the topic must be handled according to the procedure established by the Organic Statute of Refugees.

f. *The administrative decision*

After the aforementioned oral hearing has been terminated and within the following 72 hours of its celebration, the competent authority of the Ministry of the Interior and Justice must decide, in writing and through a duly motivated administrative act which must be subjected to the Organic Statute of Administrative Procedures (art. 44).

Article 50 of the Statute insists in establishing that the expulsion of aliens must be carried out through a motivated act, dictated by the competent authority of the Ministry of the Interior and Justice and in which the term for its fulfillment must be fixed.

The decision for deportation or expulsion ought to be notified to the interested alien within the following 24 hours; it must contain the complete text of the administrative procedure indicating the proceed-

ing actions and the time lapses for their execution as well as the organisms or courts before which he must appear.

The term for the fulfillment of these decisions on deportation or expulsion of aliens must be established in its texts; which must start once all administrative and judicial actions foreseen in the law have been exhausted and said deportation or expulsion is final.

g. *The hierarchic appeal*

According to article 45 of the Statute, the interested alien can bring a hierarchic action before the Ministry of the Interior and Justice within the following 5 working days of the decision; the Ministry must decide through motivated administrative action during the following 2 working days of its mediation.

h. *The revocation of the visa or document of entry*

The Ministry of the Interior and Justice, through motivated Resolution, will revoke the visa or document of entry or permanence in the territory of the Republic to those aliens incurred in the deportation and expulsion situations established in articles 38 and 39 of the Statute.

i. *Enforcement of judgment of the expulsion measure*

In case of failure in the fulfillment of the term fixed in the expulsion administrative measure (art. 50) to abandon the territory of the Republic, the alien must be taken to the departure Terminal enabled for this purpose where the competent authority must make the expulsion effective (art. 50).

D. *Rights of aliens in deportation or expulsion cases*

a. *The right to move acquired possessions*

Aliens subjected to deportation or expulsion measures who possess legally acquired goods, have a one year time period -starting from the date the measure is final- to move and place them; for this, they must have the necessary arrangements. Said transportation can be made by themselves or through a representative or attorney duly authorized by authenticated document.

b. *The right to receive labor benefits*

According to article 49 of the Statute, alien workers subjected to deportation or expulsion measures have the right to perceive the salaries, social services and all the benefits established in the Statute regulating the Labor Relations, collective hiring and other social laws applicable about the labor relation.

VII. THE CRIMINAL OFFENCES AND RESPONSIBILITY SYSTEMS

1. *The offences*

The following offences have been regulated in the Statute governing aliens and migration:

First, the offence of facilitating the illegal entry, established in article 52, through which every person who facilitates or allows the illegal entry of aliens (female and male) into the territory of the Republic can be punished with a prison sentence of 4 to 8 years.

Second, the offence of facilitating the illegal entry in the case of public officials, in which case, article 59 of the Statute states that the public official or police or military authority who, for any reason, favors or induces, by action or omission, the entrance or departure of people from the territory of the Republic either clandestine or by fraud of the migratory control established in our legal system, will be penalized with a prison sentence of 4 to 8 years, and will not be able to perform any function in the Public Administration for 10 years.

Third, the offence of alien labor exploitation, established in article 53 of the Statute, through which a prison sentence of 4 to 8 years is given to “those who hire aliens (female and male) whose permanence in the territory of the Republic is illegal, in order to exploit them as workforce in conditions that might harm, suppress or limit the labor rights recognized by legal dispositions, collective agreements or individual contracts”. The same punishment must be given to the individual who by simulating a contract or collocation, or by a similar deception, determines or favors the migration of a person to another country.

Forth, the offence of illicit immigration, established in article 55 of the Statute, which states that everyone who promotes or favors by any mean the illicit immigration of aliens into the territory of the Republic will be punished with a prison sentence of 4 to 8 years.

Fifth, the offence of illegal traffic of people, established in article 56 of the Statute, through which a punishment of a 4 to 8 year long prison sentence will be given to the natural person and the representatives of the corporation who, by action or omission, promote or mediate in the illegal traffic of people in transit or with destination in the territory of the Republic. Article 57 of the Statute establishes, as aggravating circumstance, that those who perform these conducts in order to obtain profit from it or using violence, intimidation, deceit or by taking advantage of the need situation of the victim, his/her gender or vulnerable groups, will be punished with a prison sentence of 8 to 10 years.

Likewise, for all the offences aforementioned, article 58 of the Statute states that the corresponding sentences will be imposed in their halves superior to those foreseen in articles 52, 53, 54, 55, 56 and 57 of this Statute, when in the perpetration of the events either the life, health or integrity of the persons or victim is placed in jeopardy.

2. *Criminal responsibility of corporations*

According to article 54 of the Statute, when the events foreseen in articles 52 (offence of facilitating of illegal entry) and 53 (offence of alien labor exploitation) of the Statute were imputed to corporations, the sentence must be imposed to the administrators or people in charge of the service who had been responsible of them and who in knowledge and been able to solve it, did nothing to do so.

Caracas, April 2005.